

Capítulo 22

Robert Ramsay

DUDAS RAZONABLES: LA COVID-19 Y LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN CANADÁ

El gobierno canadiense lleva tiempo intentando atraer la inversión privada para el sector de los servicios municipales de agua y aguas residuales, hasta ahora con poco éxito. Antes de la pandemia de covid-19 y la crisis económica resultante, el banco nacional de infraestructuras se comprometió a financiar una asociación público-privada en un pequeño municipio de Ontario. Sin embargo, este plan se vino abajo durante la pandemia, a pesar de la mayor presión económica que los presupuestos municipales tuvieron que afrontar. El fracaso a la hora de concretar este proyecto demuestra las debilidades del modelo P3 como alternativa para el suministro de servicios públicos municipales y ofrece un contrapunto a la política de capitalismo del desastre.

INTRODUCCIÓN

El Banco de Infraestructuras de Canadá (CIB) fue creado en 2017 por el gobierno federal como una forma de atraer capital privado para grandes proyectos de infraestructuras que generen ingresos. Concebido como sucesor de la desaparecida agencia federal PPP

Canada, el CIB solo ha anunciado desde su creación un puñado de grandes inversiones, y la presión política ha sido intensa para que el CIB muestre algunos resultados.¹

A partir de 2018, a través de presentaciones en conferencias del sector (Lavallée 2018), la dirección de la CIB informó su apertura a pequeños proyectos de infraestructura que no formaban parte de su mandato original. A mediados de 2019, el CIB había lanzado una agresiva campaña para privatizar los sistemas municipales e indígenas de agua y saneamiento en todo el país a través de asociaciones público-privadas (P3).² Aunque hasta la fecha solo se ha anunciado un proyecto en un pequeño municipio de Ontario, el CIB ha declarado que tiene previsto reproducir este ejemplo en otros municipios y comunidades indígenas de todo el país.

Esto no ha ocurrido. Más bien, la única incursión del banco en el sector del agua y saneamiento se vino abajo durante la pandemia de covid-19. Tendrá que pasar más tiempo antes de que una revisión exhaustiva del caso pueda identificar todos los puntos de inflexión. Sin embargo, lo que está claro ahora es que ni siquiera la desaceleración económica causada por una crisis de salud pública fue suficiente para salvar el plan P3 de sus debilidades inherentes.

LA PRESIÓN FINANCIERA

La austeridad presupuestaria y la histórica infrafinanciación de las infraestructuras, tanto en el pasado como hoy en día, han dejado a los municipios canadienses luchando por encontrar los recur-

¹ Por ejemplo, en una reunión de la Comisión de Finanzas celebrada el 22 de junio de 2020, los miembros del Parlamento presionaron repetidamente a los funcionarios del CIB para que dieran pruebas de los avances y de si el banco había completado algún proyecto.

² En Canadá, la expresión “P3” se usa para aludir al mismo tipo de contratos que en otros países se conocen como “PPP”, los llamados “contratos de Participación Público-Privada (PPP)” acordados entre organismos gubernamentales y sujetos privados con el objeto de desarrollar una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de infraestructura o gestión de servicios.

Los municipios necesitan recursos necesarios para construir nuevas instalaciones de agua y saneamiento, o para mejorar las existentes. Cuando la pandemia de covid-19 comenzó, a principios de 2020, las cuarentenas y confinamientos impuestos en todo Canadá precipitaron una enorme crisis financiera para los municipios, agravando un entorno fiscal ya muy limitado. La Federación de Municipios Canadienses (FCM) estima que los municipios se enfrentarán a un déficit de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares canadienses en fondos operativos (FCM 2020). Las ciudades con sistemas de transporte colectivo se vieron especialmente afectadas, ya que estos sistemas deben seguir funcionando con una reducción drástica del número de usuarios. Estas graves condiciones llevaron a muchos sindicatos del sector público y grupos de la sociedad civil del país a predecir una mayor apertura de los municipios pequeños y con problemas de liquidez a la opción de privatizar el agua y el saneamiento a través del CIB.

Actualmente, la gran mayoría de los sistemas de agua saneamiento de Canadá son de propiedad y gestión públicas. Los datos del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) indican que menos del 2% de las instalaciones de agua y saneamiento canadienses son de propiedad privada o están gestionadas por empresas federales u organismos provinciales. Los datos también indican que la confianza del público en los sistemas municipales de agua y aguas residuales es alta, y que aproximadamente el 90% de los municipios del país no tienen intención ni interés en aumentar la participación del sector privado. Los municipios prestan un servicio de alta calidad y con pocos fallos, aunque los problemas derivados de las tuberías de plomo en las viviendas más antiguas siguen planteando un problema de calidad del agua en algunos barrios urbanos (IIJ 2019). Asimismo, el acceso a agua potable no contaminada en las comunidades indígenas sigue siendo un problema persistente que el gobierno federal no ha podido solucionar (Gerster y Hessey 2019).

Los municipios son los principales responsables del suministro de agua en Canadá. Lo logran a través de una combinación de im-

puestos, gravámenes y tasas de usuarios, así como de subvenciones del gobierno provincial y federal. Los municipios están autorizados a endeudarse para financiar las mejoras de las infraestructuras, pero esta capacidad es limitada. Por ejemplo, los municipios de las provincias de Ontario y Alberta no pueden superar el 25% de sus ingresos propios en costes anuales de servicio de la deuda. En Manitoba el límite del servicio de la deuda para los municipios es del 20%, mientras que en Nueva Escocia los municipios no pueden superar el 30% de sus ingresos propios en deuda total anual.

Con el tiempo, el gobierno federal y las autoridades provinciales han pedido a los municipios que hagan más con menos. Los municipios poseen y gestionan más del 60% de las infraestructuras del país, pero solo reciben 10 céntimos de dólar en ingresos fiscales del gobierno federal (Johal 2019). Al mismo tiempo, los municipios solo tienen unas pocas herramientas con las que pueden recaudar ingresos por sí mismos. Su herramienta más lucrativa, los impuestos sobre la propiedad, ya son altos en comparación con los de otros países, y las propuestas de subida de este tipo impuestos resultan permanentemente impopulares entre los votantes municipales. Aunque el gobierno federal de orientación liberal liderado por Justin Trudeau ha hecho esfuerzos bienvenidos para impulsar la financiación de infraestructuras para los municipios –por ejemplo, duplicando el fondo alimentado por la recaudación del impuesto al consumo de gasolina, en 2018 y 2019–, la financiación federal ha sido lenta, lo que ha provocado críticas de la Oficina Presupuestaria del Parlamento, así como de asociaciones civiles como el Centro Canadiense de Análisis Económico (Haider y Moranis 2019).

El capital privado que busca aprovechar la infrafinanciación crónica de los municipios y las nuevas oportunidades de rentabilidad de las inversiones en este sector, lleva mucho tiempo intentando introducirse en los mercados del agua y el saneamiento y, por lo general, ha encontrado en el gobierno federal un socio amistoso (Harris 2007). En 2013, PPP Canada un organismo creado por el gobierno conservador presidido por Stephen Harper, y que ya ha desapare-

cido– publicó un informe sobre el sector del agua y el saneamiento titulado “La mejora de la infraestructura pública con el agregado de valor, rapidez y transparencia y en beneficio de los contribuyentes a través de las asociaciones público-privadas” (PPP Canada 2013). A pesar de la risible presunción del título, este informe señalaba que “los modelos de P3 se han utilizado con poca frecuencia para proyectos de agua y saneamiento en Canadá”, porque –entre otras razones citadas– “los márgenes de financiación privada superan a los del sector público... lo que, en última instancia, hace más difícil que las P3 de diseño, construcción, financiación y explotación de infraestructura demuestren la rentabilidad”.

La APP de Canadá tuvo poco éxito en la privatización del agua y el saneamiento antes de su clausura, pero esto no significó que el gobierno federal desistiera de continuar con su programa de privatización. El 15 de julio de 2019, el CIB –como organismo sucesor de la APP de Canadá– anunció una inversión de 20 millones de dólares en un proyecto de agua y saneamiento a 20 años en el municipio de Mapleton, Ontario (CIB 2019). A diferencia de sus compromisos financieros en otros proyectos, la inversión del CIB iba a ser “en forma de un paquete de financiación de la deuda estandarizado” a un socio del sector privado, lo que “mejoraría el coste de la financiación del proyecto” y garantizaría “una transferencia adecuada del riesgo al sector privado”.

Tras el anuncio, el CIB y sus entidades asesoras, entre las que se encontraba el mayor bufete de abogados de Canadá,³ desarrollaron una fuerte campaña de difusión entre otros municipios y asociaciones de gobiernos locales e indígenas, como la Asociación de Municipios de Ontario (AMO) y la Coalición de Grandes Proyectos de las Primeras Naciones (FNMPC), promocionando este modelo como “innovador” y como “un proyecto piloto para demostrar nuevos

³ Borden Ladner Gervais LLP (BLG), que tiene amplia experiencia en P3 de infraestructuras. Las grandes empresas de contabilidad y asesoramiento financiero, como PricewaterhouseCoopers LLP y KMPG, también se han mostrado activas en la promoción de proyectos del CIB.

modelos de estructuración y financiación de proyectos municipales de infraestructura de agua y saneamiento” (Chattha 2019). También se organizaron presentaciones para otras organizaciones activas en este sector, como la Red Canadiense del Agua, y se establecieron contactos con los gobiernos provinciales (Froese 2019).⁴

EL MODELO MAPLETON: ¿UNA CUÑA PARA EL RESTO DEL PAÍS?

Mapleton, un municipio de la provincia de Ontario, era un objetivo idóneo para el CIB porque tenía un historial bien documentado de búsqueda infructuosa de subvenciones y recursos provinciales y federales para la ampliación de su infraestructura hídrica. En 2012, Mapleton presentó una solicitud de financiación de alta prioridad a la Iniciativa de Inversión en Infraestructuras Municipales del gobierno de Ontario, solicitando fondos para ampliar la capacidad del sistema de agua para satisfacer el desarrollo residencial e industrial. Esta solicitud fue denegada (Wellington Advertiser a). En 2013 el municipio volvió a solicitar financiación para una nueva torre de agua en la comunidad de Drayton, a través del Fondo de Infraestructuras de Municipios Pequeños, Rurales y del Norte de la provincia, la que también fue rechazada (ibid). Al año siguiente, con la esperanza de tener más suerte a nivel federal, el municipio solicitó la financiación de la torre de agua a través del Fondo de Pequeñas Comunidades de Canadá. Esta solicitud también fue denegada, al parecer porque el proyecto no estaba referido a un problema de salud importante, y porque el municipio se encontraba en una buena situación fiscal y podía endeudarse (Wellington Advertiser b).

No está claro si el municipio buscó opciones de financiación provincial y/o federal para el actual proyecto de agua y saneamiento.

⁴ El gobierno provincial de Manitoba incluyó lo siguiente en sus cartas de mandato a los ministros que acompañan su presupuesto para 2020: “...trabajar con otros niveles de gobierno para explorar la viabilidad de utilizar un modelo P3 con el Banco de Infraestructura de Canadá para financiar y entregar las mejoras necesarias al Centro de Control de la Contaminación del Agua de la Ciudad de Winnipeg”.

to. Pero es comprensible que los dirigentes del municipio se sientan frustrados por la falta de apoyo de las instancias superiores de gobierno en el pasado y, por tanto, estén abiertos a considerar una alternativa P3. Las actas del consejo municipal no indican exactamente cuándo se presentó por primera vez la propuesta de una P3 subvencionada por el CIB, pero fue a finales de 2018 cuando se empezó a hablar del proyecto del agua, y el 4 de diciembre el consejo ordenó al personal de la ciudad que contratara al bufete de abogados Borden Ladner Gervais LLP (BLG) para llevar a cabo el proceso de Solicitud de Cualificaciones (RFQ). Al 28 de mayo de 2019 ya se habían elegido seis proponentes que respondían a la RFQ, y el consejo autorizó a BLG a contratar a la firma de consultoría contable y financiera PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) para preparar un informe de costo-beneficio sobre varios modelos para el proyecto de agua y saneamiento. Este informe fue entregado y difundido públicamente –con correcciones– el 11 de julio de 2019.

El informe de PwC al Consejo compara tres modelos para la ejecución del proyecto: (a) contratación pública, (b) concesión, y (c) concesión con financiación del CIB. Como es lógico, el informe concluye que el modelo de concesión con financiación del CIB sería el que aporta más valor. Como es habitual en estos informes, los costes de capital de la opción pública se contabilizan durante el periodo de construcción, lo que se traduce en una drástica subida de tarifas durante los primeros años, tras la cual éstas volverían a la normalidad. En los dos modelos privados, los costes de capital se amortizan a lo largo de la vida del contrato propuesto (20 años), lo que permite la estabilidad de las tarifas. Esto se presenta como si los municipios no pudieran emitir deuda en absoluto, lo que no es cierto. El informe de PwC también calcula el riesgo retenido de Mapleton en el modelo público en 6,3 millones de dólares, entre el 21 y el 42% del valor total del proyecto. Sin este cálculo de riesgo inexplicablemente astronómico, la opción pública sería más barata que cualquiera de los dos modelos privados. De hecho, este cálculo del riesgo subyace en las conclusiones sobre la rentabilidad. CUPE

ha cuestionado la integridad de este cálculo en otros casos en el pasado, al igual que numerosos auditores.⁵

En particular, el informe de PwC no incluye en su análisis ninguna opción de financiación provincial o federal. Es cierto que Mapleton se ha visto obstaculizada en sus esfuerzos anteriores por recibir financiación para infraestructuras públicas, pero el gobierno de Trudeau ha aumentado significativamente la disponibilidad, si no la rapidez, de la financiación para infraestructuras a lo largo de varios presupuestos, y ha indicado que el agua y el saneamiento son un área prioritaria. La duplicación del fondo que proporciona financiación federal a los municipios directamente o a través de una asociación de autoridades locales (por ejemplo AMO en Ontario), es un avance especialmente relevante para los municipios en situaciones similares a la de Mapleton. Sin embargo, el informe de PwC no menciona esta opción.

Aun así, el CIB empezó a calificar el caso de Mapleton como un “proyecto piloto” en las primeras fases del proceso, y un modelo que podría reproducirse “en todo el país” (CIB 2019). Si esto ocurriera, podría conducir a una privatización generalizada de los sistemas municipales de agua, algo que hasta ahora ha sido poco frecuente en Canadá pero que ya ha sido intentada en muchos otros países (Kishimoto et al. 2020).

Sin embargo, en lugar de ser innovador, este “nuevo modelo” del CIB era en realidad una asociación público-privada estándar de diseño, construcción, financiación y explotación, en la que los mayores costes de endeudamiento del sector privado habrían sido respaldados con dinero público. De este modo, las empresas privadas implicadas corrían muy poco riesgo financiero al endeudarse. Con ello se pretendía animar a las empresas privadas a buscar oportunidades en el sector del agua y las aguas residuales, incluso en

⁵ El auditor general federal, al examinar la P3 del puente de Champlain, criticó los cálculos de coste y beneficio por considerarlos poco claros, inexactos y sesgados a favor de una P3. La auditoría general de Ontario, en su revisión de 74 P3 en 2014, hizo una crítica similar.

comunidades pequeñas.

Para los municipios y las comunidades indígenas, este acuerdo crea la ilusión de que no habría diferencia de costes entre la contratación pública y una P3. Sin embargo, la investigación ha demostrado una y otra vez que las P3 son más caras (sobre todo en términos de costes de financiación) y de menor calidad que los proyectos públicos, y que la transferencia del riesgo al sector privado es muy exagerada (Boardman et al. 2016).

¿DUDAS RAZONABLES?

El Concejo Municipal de Mapleton estaba preparado para seleccionar una de las propuestas del sector privado en su reunión de marzo de 2020, pero la reunión se retrasó debido a la pandemia de coronavirus. Al mismo tiempo, el aumento de la concienciación de la comunidad sobre el plan provocó el escrutinio de los medios de comunicación y preguntas de los residentes (Raftis 2020a). Se observó y reconoció que el municipio había llevado a cabo todas sus deliberaciones sobre el plan a puerta cerrada con sus abogados, que no se había realizado ninguna consulta pública y que partes del estudio de costo-beneficio había sido enmendado. Mientras tanto, la prematura campaña publicitaria del CIB había generado bastante preocupación en diversas entidades del sector público y entre los defensores del derecho al agua, como el Council of Canadians (Consejo de Canadienses) (Bui 2019).

La decisión se retrasó durante meses, ya que otras cuestiones de salud pública tuvieron prioridad. A finales de julio de 2020, para sorpresa de los observadores externos, el Concejo Municipal de Mapleton decidió poner fin al proceso de licitación. “El director administrativo, Manny Baron, informó al concejo que, tras una larga revisión técnica y financiera, su opinión era que la ciudad no debía seguir adelante con el proceso de licitación”, informó el sitio web GuelphToday.com (Kozolanka 2020). “El concejo estuvo de acuerdo con el director administrativo y muchos de sus miembros conside-

raron que había demasiado riesgo en tener una empresa privada a cargo de la gestión del agua y el saneamiento”. El municipio decidió explorar otras opciones para avanzar en el proyecto por su cuenta. Al explicar el cambio de rumbo, el alcalde Gregg Davidson declaró que sería más ventajoso para el municipio financiar el proyecto por sí mismo, en lugar de proceder con una P3, incluso una respaldada por el CIB (Raftis 2020b).

Aunque no hay pruebas directas de que la llegada de la covid-19 haya tenido una influencia directa en esta decisión, la explosión de una crisis en la que el agua segura y fiable es tan esencial para la salud y el bienestar de la comunidad debe haber dado mucho que pensar. Sin duda, condujo a que el Concejo de Mapleton se tomara más tiempo para analizar las alternativas antes de asumir una decisión tan monumental.

El retraso también ofreció más tiempo para que los opositores a la P3 se movilizaran. Tras el anuncio inicial del en el verano de 2019, varias organizaciones se unieron en torno a la elaboración de una respuesta a esa propuesta. CUPE, el mayor sindicato de Canadá y con el mayor número de empleados municipales, publicó inmediatamente un análisis de la propuesta (CUPE 2019) y se puso en contacto con sus miembros en la localidad. El Consejo de Canadienses, una organización no gubernamental que aboga por el agua pública y limpia (entre otras iniciativas), trabajó a través de su sección local para dar a conocer las deliberaciones de la ciudad. Un grupo local de activistas del agua organizó una campaña de envío de cartas y un seminario web informativo (WWW 2020) que contó con una gran asistencia y que situó el caso de Mapleton en el contexto global de desprivatización a escala municipal.

La creciente preocupación social fue percibida por las autoridades de la ciudad. Al explicar las circunstancias de la decisión de cancelar el proyecto P3 financiado por el CIB, el alcalde Gregg Davidson declaró al periódico local: “Cuando recibes llamadas telefónicas de Inglaterra preguntando qué pasa en Mapleton, Ontario, es bastante significativo. Y eso es lo que nos pasó durante este proce-

so” (Raftis 2020b). También se hizo eco de la conclusión del director administrativo sobre la transferencia de riesgos al afirmar que el “análisis financiero indicaba que la autofinanciación era más ventajosa para el municipio que seguir adelante con la RFP”.

CONCLUSIÓN

La privatización de los servicios de agua y saneamiento subordina los servicios públicos de calidad a la rentabilidad de las inversiones. Los municipios pierden la capacidad de mantener el control sobre sus instalaciones y la calidad del servicio, a menudo durante largos periodos de tiempo, ya que se ven atrapados en contratos restrictivos y costosos. El dinero público que debería destinarse a la financiación directa de las infraestructuras de interés público se canaliza, en cambio, hacia empresas privadas cuya principal obligación es con los accionistas. Los esfuerzos por privatizar los sistemas de agua y aguas residuales van en contra de la tendencia mundial. Y por una buena razón: “Los experimentos de privatización han fracasado en todo el mundo, y una tendencia creciente en Europa, Estados Unidos y América Latina es hacia la remunicipalización (o desprivatización) de los proyectos de agua privados y P3. Una y otra vez, la privatización parcial o total de los sistemas de agua ha sido un desastre; la rendición de cuentas desaparece, las tarifas del agua suben, los trabajadores son despedidos y los niveles de servicio disminuyen” (CUPE 2010).

En un intento de imponer el modelo P3 a los municipios canadienses, el CIB sigue animando agresivamente a inversores privado a buscar oportunidades en el sector del agua y el saneamiento. Seis consorcios del sector privado respondieron a la solicitud de propuestas en Mapleton, entre ellos EPCOR, Stantec, Veolia y ASI. ¿Qué interés tendrían estos actores en el proyecto de agua a pequeña escala de Mapleton si el CIB no se ofreciera a garantizar su deuda? Los gobiernos de todo Canadá demuestran cada vez más que están dispuestos a engrasar las ruedas del sector privado. Por

ejemplo, el gobierno conservador de Ontario, encabezado por Doug Ford, está modernizando (léase debilitando) sus procedimientos de evaluación ambiental para los proyectos de infraestructura, y está asumiendo el riesgo de la reubicación de servicios públicos para los proyectos P3. En Nueva Escocia, el Gobierno está “eliminando la burocracia para garantizar que “la balanza del riesgo no se incline hacia los actores del mercado” (Durant 2019).

Para los municipios, este acuerdo crea la ilusión de que no hay diferencia entre el coste de una P3 y el coste de la contratación pública. Sin embargo, la financiación del CIB no es gratuita y el municipio seguirá pagando por ella, ya sea directamente a través de los pagos de arrendamiento o de explotación, o indirectamente a través de las facturas de los usuarios del servicio. De hecho, el director general del CIB reconoció que este acuerdo hará que el dinero fluya de los bolsillos de los residentes a las grandes empresas, declarando a una revista de negocios que “los usuarios financiarán la mayor parte de las operaciones y de los retornos a los inversores a través de las tarifas de los usuarios y otros mecanismos de ingresos” (Press-Progress 2020). Los municipios también pueden verse atraídos por las P3 en el sector del agua y el saneamiento porque los costes no se contabilizarán y, por tanto, no afectarán a sus límites de endeudamiento. Una vez más, se trata de un truco contable que disfraza los pasivos a largo plazo y da lugar a una “subestimación de la carga estatal que, en cambio, se presenta como neutral en cuanto a los costes” (Cepparulo et al. 2019).

El fracaso del plan del CIB en Mapleton no significa el fin de sus ambiciones en el sector del agua y saneamiento. De hecho, la covid-19 puede ser visto por el CIB como una oportunidad para ampliar sus planes, debido a las carencias presupuestarias municipales causadas por la crisis económica. Por lo tanto, será necesario que los opositores a la privatización de los servicios públicos, incluidos los sindicatos y los grupos de defensa del sector público, permanezcan vigilantes mientras la CIB se reagrupa en previsión de desempeñar un papel importante en el proyecto de recupera-

ción económica post-covid.

Al mismo tiempo, la pandemia de covid-19 y su consiguiente trastorno económico presentan una oportunidad para ampliar la resistencia a tales esfuerzos de privatización, sirviendo de recordatorio a los canadienses de que los servicios de agua y saneamiento de propiedad y gestión pública son esenciales en tiempos de crisis. Por ejemplo, un grupo local de activistas del agua aprovechó este acontecimiento y organizó una conferencia virtual en septiembre de 2020 que utilizó el impulso de la historia de Mapleton para definir y promover un programa regional de justicia del agua (Watershed 2020). A medida que la resistencia a la privatización del agua se extiende más allá, Mapleton puede servir de contrapunto oportuno y profético a la lógica del capitalismo del desastre.

REFERENCIAS

- Boardman, A.E., Siemiatycki, M. y Vining, A.R. 2016. The Theory and Evidence Concerning Public-Private Partnerships in Canada and Elsewhere. University of Calgary, School of Public Policy: SPP Research Papers 9:12.
- Bui, V. 2019. Our Water is for Sale. Ottawa: Council of Canadians. <https://bit.ly/38l27cF> (consultado el 11 de agosto de 2020).
- Canada Infrastructure Bank (CIB). 2019. Canada Infrastructure Bank Announces up to \$20 Million Investment Commitment in Mapleton Water and Wastewater Project. Press release. July 15. Ottawa: Canada Infrastructure Bank.
- Canadian Union of Public Employees (CUPE). 2019. Infrastructure Bank targets local water systems. 19 de julio. <https://bit.ly/3kdhohI> (consultado el 11 de agosto de 2020).
- Canadian Union of Public Employees (CUPE) and the Council of Canadians. 2010. *Public Water for Sale: How Canada Will Privatize our Public Water Systems*. Ottawa: CUPE.
- Cepparulo, A., Eusepi, G. y Giuriato, L. 2019. Public-Private Partnership and Fiscal Illusion: A systematic review. *Journal of Infrastructure, Poli-*

- cy and Development*, 3:2.
- Chattha, S. 2019. CIB Commits up to \$20 Million in Mapleton Water and Wastewater Project. *WaterCanada*. 15 de julio.
- Durant, D. 2019. CCPPP: Key takeaways from provincial minsters. P3 Bulletin. 3 de diciembre. <https://bit.ly/36wuemL> (consultado el 11 de agosto de 2020).
- Federation of Canadian Municipalities (FCM). 2020. *Protecting Vital Municipal Services*. 23 de abril. Ottawa: Federation of Canadian Municipalities.
- Froese, I. 2020. Too many Manitobans relying on welfare, new marching orders for government ministers say. *CBC News*. 4 de marzo.
- Gerster, J., y Hessey, K. 2019. Why some First Nations still don't have clean drinking water – despite Trudeau's promise. *Global News*. 3 de octubre.
- Global News, Toronto Star, and Institute for Investigative Journalism (IIJ). 2019. Is Canada's tap water safe? *Global News*. 5 de noviembre.
- Haider, M., y Moranis, S. 2019. Infrastructure spending can help unlock housing supply, but the funds aren't flowing. *Financial Post*. 20 de mayo.
- Harris, C. 2007. Canada turns to PPPs for infrastructure. *Investment Executive*. 2 de octubre.
- Johal, S. 2019. *The case for growing the Gas Tax Fund: A report on the state of municipal finance in Canada*. Ottawa: Federation of Canadian Municipalities.
- Kishimoto, S., Steinfors, L., y Petitjean, O. (Eds.). 2020. *The Future is Public: Towards Democratic Ownership of Public Services*. Amsterdam: Transnational Institute.
- Kozolanka, K. 2020. Mapleton puts brakes on outside involvement in water expansion plans. *GuelphToday.com*. 31 de julio. <https://bit.ly/2Iha4EC> (consultado el 11 de agosto de 2020).
- Lavalée, P. 2018. Keynote Address. Annual Meeting of the Canadian Council for Public-Private Partnerships. Toronto. 6 de noviembre.
- PPP Canada. 2013. *Water/Wastewater Sector Study*. Ottawa: PPP Canada.
- PressProgress. 2020. Federal Infrastructure Bank Says It Sees 'Potential' to Privatize Local Water Systems Across Canada. 14 de enero.

- Raftis, P. 2020a. Mapleton water, wastewater project draws fire from CUPE. *Wellington Advertiser*. 25 de marzo.
- Raftis, P. 2020b. Mapleton drops plans to outsource water, wastewater infrastructure. *Wellington Advertiser*. 5 de agosto.
- Watershed 2020: Towards a Water Justice Agenda. 2020. Conference organized by Wellington Water Watchers and the People's Water Campaign. September 26. <https://bit.ly/3ldjbVk> (consultado el 11 de agosto de 2020).
- Wellington Advertiser. s.d. (a). Mapleton loses bid for water tower funding through infrastructure program. <https://bit.ly/3lpdOCV> (consultado el 11 de agosto de 2020).
- Wellington Advertiser. s.d. (b). Mapleton turned down again for water tower for Drayton. <https://bit.ly/35aKytJ> (consultado el 11 de agosto de 2020).
- Wellington Water Watchers (WWW). 2020. Webinar: Resisting Water Privatization from Mapleton to Berlin. 14 de julio. <https://bit.ly/38prWbi> (accessed August 21, 2020).

